



Resolución No. CSJCOR23-739

Montería, 19 de octubre de 2023

“Por medio de la cual se decide una Vigilancia Judicial Administrativa”

Vigilancia Judicial Administrativa No. 23-001-11-01-002-2023-00558-00

Solicitante: Sra. Aleida Isabel Roca Castillo

Despacho: Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería

Funcionaria Judicial: Dra. Wendy Buelvas Hoyos

Clase de proceso: Ejecutivo

Número de radicación del proceso: 23-001-40-227-062-2014-00200-00

Magistrado Ponente: Dr. Labrenty Efrén Palomo Meza

Fecha de sesión: 19 de octubre de 2023

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en ejercicio de sus facultades legales, conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, a lo aprobado en sesión ordinaria del 19 de octubre de 2023 y, teniendo en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 04 de octubre de 2023, y repartido al despacho del magistrado ponente el 05 de octubre de 2023, la señora Aleida Isabel Roca Castillo en su condición de parte demandada, presenta solicitud de vigilancia judicial administrativa contra el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, respecto al trámite del proceso ejecutivo singular promovido por Coogrodescor contra Aleida Isabel Roca Castillo, radicado bajo el No 23-001-40-227-062-2014-00200-00.

En su solicitud, la peticionaria manifiesta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...se ha solicitado RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA, DESARCHIVO DEL PROCESO, LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DEL SUELDO COMO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA Y PENSIONES, LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE REMANENTE A LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES Y ENTREGA DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES, pero el juzgado hace caso omiso al actuar procesal que debe hacer el operador judicial pues ha pasado mucho tiempo y todavía el juzgado no resuelve y más cuando el consejo lo había requerido para que resolviera esa solicitud.”

Por lo tanto, solicito por este medio administrativo que se requiera al despacho las razones de su demora en resolver nuestra solicitud de RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA, DESARCHIVO DEL PROCESO, LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DEL SUELDO COMO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA Y PENSIONES, LEVANTAMIENTO DE EMBARGO DE REMANENTE A LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES Y ENTREGA DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES.”

1.2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por Auto CSJCOAVJ23-424 del 09 de octubre de 2023, fue dispuesto solicitar a la doctora Wendy Buelvas Hoyos, Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, información detallada respecto a la gestión del proceso en cuestión, otorgándole el término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la comunicación del anterior proveído (09/10/2023).

1.3. Del informe de verificación

El 13 de octubre de 2023, la doctora Wendy Buelvas Hoyos, Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, presenta informe de respuesta dirigido a esta Judicatura, a través del cual comunicó lo siguiente:

“En cuanto al desarrollo y el estado actual del proceso, tenemos que la Demanda de Mínima Cuantía promovida por COOAGRODESCOR contra ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA Y RAFAEL ALBERTO MASS THOMAS. Rad. N° 2014-00200, fue dada en reparto al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería el día 10 de julio de 2014, se libró orden de pago mediante auto del 15 de julio del mismo año, y se ordenó la terminación del proceso por pago total de la obligación mediante proveído fechado 21 de enero de 2020, en el que además se dispuso que las medidas en contra de los ejecutados y lo que se desembargaba, se pusiera a disposición del Proceso adelantado por LUIS CAMARGAO CALDERA en contra de ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, que se tramita en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería, bajo el radicado N° 23-001-40-03-003-2012-02621, en cumplimiento al Oficio N° 2535 del 30 de mayo de 2017.

Se verifica que el 08 de agosto de 2023, la ejecutada señora ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, presenta un escrito mediante el que solicita: i) desarchivo del proceso ii) reconocimiento de personería a su apoderada judicial, iii) levantamiento de medidas cautelares sobre su salario y pensión iv) levantamiento de medidas cautelares de embargo de remanentes v) dar 2 Referencia: Respuesta a solicitud de informe dentro de la vigilancia judicial radicada N° 23-001-11-01-002-2023-00558-00. cumplimiento a la orden de conversión de depósitos judiciales, dada mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2022 vi) se entreguen dineros en favor de la ejecutada señora ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, atendiendo a que el proceso se encuentra terminado.

Por medio de auto del 10 de octubre de 2023, este Despacho Judicial: i) ordenó el desarchivo del proceso ii) reconoció personería a la abogada MELISA DE JESÚS HERRERA GUZMAN, para actuar como apoderada de ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA iii) negó la solicitud de levantamiento de medidas y de entrega de depósitos a la ejecutada ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, atendiendo a que si bien el proceso se encuentra terminado, existe un embargo del remanente iv) ordenó requerir al Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería para que se sirva informar si se encuentra vigente el proceso ejecutivo singular seguido por LUIS CAMARGAO CALDERA en contra de ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, radicado N° 23-001-40-03-003-2012- 02621 o si por el contrario, se encuentra terminado, atendiendo a que dentro del mismo se ordenó un embargo de remanente vi) se ordenó que una vez se recibiera respuesta del Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería, se pasara el proceso a despacho por secretaría.”

Ante toda esta situación, me permito informarle Honorable Magistrado que buscamos atender la mayor cantidad de requerimientos dentro de los más de 4.900 procesos que actualmente están bajo nuestro conocimiento, desde que entramos en funcionamiento el viernes 28 de abril de 2023, en todo caso, se tomarán las medidas necesarias a que haya lugar, con el fin de evitar este tipo de traumatismo e inconvenientes a los usuarios.

En todo caso, se presenta el resumen de las actuaciones, de la forma solicitada por el Magistrado, así:

ACTUACIÓN	FECHA
REPARTO DE DEMANDA.	10 DE JULIO DE 2014.
AUTO QUE LIBRA ORDEN DE PAGO.	15 DE JULIO DE 2014.
AUTO QUE DA POR TERMINADO EL PROCESO	21 DE ENERO DE 2020.
SOLICITUD PRESENTADA POR ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA	08 DE AGOSTO DE 2023.
AUTO QUE RESUELVE SOLICITUDES DE ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA.	10 DE OCTUBRE DE 2023.

Así las cosas, doy por presentado mi informe y estaré atenta a cualquier inquietud e información adicional que requiera.”

De conformidad con el artículo 5° del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 06 de 2011, la información rendida por la funcionaria judicial se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento y contiene certeza, salvo prueba en contrario.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Planteamiento del problema administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, esta Corporación debe verificar si existe mérito para disponer la apertura del trámite de Vigilancia Judicial Administrativa o, por el contrario, si lo procedente es archivar la presente solicitud.

2.2. El caso concreto

De la petición de vigilancia formulada por la señora Aleida Isabel Roca, se colige que su principal inconformidad radica en que, el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, no había emitido un pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, desarchivo del proceso, levantamiento

de medidas cautelares del sueldo como docente de la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba y Pensiones, levantamiento de embargo de remanente a los diferentes despachos judiciales y entrega de los depósitos judiciales, presentada el 08 de agosto de 2023.

Al respecto, la doctora Wendy Buelvas Hoyos, Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, presentó una relación de las actuaciones surtidas al interior del proceso en orden cronológico. Además, informó y acreditó a esta Seccional que mediante providencia del 10 de octubre de 2023, resolvió las solicitudes de la peticionaria. La funcionaria anexa a su escrito de respuesta providencia en comento, la cual en su parte resolutive resuelve:

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente demanda.

SEGUNDO: ORDENAR el **DESARCHIVO** del proceso conforme lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada MELISA DE JESÚS HERRERA GUZMAN, para actuar como apoderada de ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, con facultad para recibir, en los términos del poder conferido.

CUARTO: NEGAR la solicitud de levantamiento de medidas, por las razones arriba expuestas.

QUINTA: NEGAR la solicitud de entrega de depósitos a la ejecutada ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEXTA: REQUERIR al Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería para que se sirva informar si se encuentra vigente el Proceso Ejecutivo Singular seguido por LUIS CAMARGAO CALDERA en contra de ALEIDA ISABEL ROCA CASTILLA, radicado N° 23-001-40-03-003-2012-02621 o si por el contrario, se encuentra terminado, atendiendo a que dentro del mismo se ordenó un embargo de remanente con dirección a este proceso, que fue comunicado a este Despacho mediante Oficio N° 2535 de mayo 30 de 2017. Por secretaría Oficiése, suministrando los datos necesarios.

SÉPTIMO: Una vez recibida respuesta del Juzgado Tercero Civil Municipal de Montería, en los términos del numeral anterior, pasar el proceso a Despacho.

En ese orden de ideas, como quiera que en el Artículo Sexto del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamenta: *“el funcionario o empleado requerido está en la obligación de normalizar la situación de deficiencia dentro del término concedido para dar las explicaciones”*, y en este evento la funcionaria judicial se pronunció respecto de las solicitudes impetradas por la peticionaria por medio de providencia del 10 de octubre de 2023. Por lo tanto, se advierte que, la funcionaria judicial, dio cumplimiento a la obligación contenida en el referenciado artículo. En consecuencia, esta Corporación, tomará dicha actuación como medida correctiva.

Ahora bien, para esclarecer la situación en la que se encuentra la célula judicial en comento, es pertinente extraer la información estadística reportada en la plataforma SIERJU BI. Se tiene entonces que, al finalizar el segundo trimestre de esta anualidad (30/09/2023), la carga

de procesos del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería era la siguiente:

Concepto	Inventario Inicial	Ingresos	Salidas		Inventario Final
			Rechazados, retirados o remitidos a otros despachos	Egresos	
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales	2361	0	5	210	2146

De lo anterior, se encuentra demostrado que el despacho registra en su inventario una carga efectiva (Carga total – Salidas) de **2146 procesos**, la cual supera la capacidad máxima de respuesta de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple para el año 2023, pues en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12040 del 30 de enero de 2023¹, la misma equivale a **1361 procesos**; en ese sentido, el juzgado atraviesa por una situación compleja, que le impide a la funcionaria, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, cumplir con los términos fijados en la ley, lo que a la postre, causa una mora en la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento.

CARGA TOTAL	2361
CARGA EFECTIVA	2146

Sobre el particular, debe precisarse que el Consejo Superior de la Judicatura ha definido la “*capacidad máxima de respuesta*” (Acuerdo PSAA16-10618), como punto de referencia para establecer el número límite de procesos que pueden ser atendidos por un juzgado, de acuerdo a la capacidad humana y logística con la que cuente dicha oficina para responder a la demanda de justicia; en el caso particular del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, su carga laboral desborda el límite establecido por dicha Corporación para los juzgados de igual categoría, de lo cual deviene, indefectiblemente, la situación de congestión con la que cuenta.

Ahora bien, respecto de la congestión judicial, es importante reconocer que no en todos los casos los operadores de justicia pueden cumplir de manera irrestricta con los términos judiciales, pues los escenarios donde se desarrollan los debates procesales están sometidos a situaciones “*imprevisibles e ineludibles*”², como el exceso de trabajo o la congestión judicial, que le impiden a la juez, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, cumplir con los términos fijados en la ley, tales circunstancias no pueden constituirse en una constante en la tarea de administrar justicia; se hace necesario que los despachos judiciales propendan por superar la situación de congestión y la mora que existe en la tramitación de los procesos.

¹ “Por medio del cual se determina la capacidad máxima de respuesta para magistrados, periodo 2023-2024, y jueces de la República, periodo 2023”

² Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia T-494/14, señaló:

“En razón a la jurisprudencia decantada con antelación, tenemos que el incumplimiento de los plazos fijados en la ley para dar trámite a los procesos y a las solicitudes que hagan parte del mismo, no configura la violación del derecho fundamental al debido proceso y a un proceso sin dilaciones, cuando se prueba que dicha mora o retardo es justificado, en otras palabras, que no obedece a la incuria o negligencia de la autoridad judicial, sino que atiende a factores o situaciones objetivamente “imprevisibles e ineludibles” que impiden dar pleno cumplimiento a los plazos procesales.” (Negritas fuera del texto)

De manera específica, la Corte Constitucional precisó que no existe vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso, cuando la mora judicial no resulta imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra justificación en la falta de capacidad logística y humana de la oficina judicial. Lo anterior, quedó plasmado en la sentencia T-494/14, que a su tenor literal reza lo siguiente:

*“Esta Corporación ha señalado que la mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia. **Este fenómeno es producto de diferentes causas, en la mayoría de los casos está relacionada con el número elevado de procesos que corresponde resolver a cada despacho, los cuales superan las condiciones estructurales del mismo, y por lo tanto dificulta evacuarlos en tiempo (fenómeno conocido como hiperinflación procesal); evento en el cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que no existe vulneración del derecho al debido proceso, pues la dilación no es imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra justificación en la falta de capacidad logística y humana existente para resolver los asuntos que le fueron asignados para su decisión.**”* (Negritas fuera del texto).

Así lo ha venido sosteniendo esta Seccional, al reconocer que, si bien las actuaciones procesales y las correspondientes decisiones judiciales, deben surtirse y proferirse con sujeción a los términos establecidos en la ley, no puede dejarse a un lado la alta carga laboral a la que actualmente se encuentran sometidos algunos juzgados, que en la mayoría de los casos excede la capacidad de respuesta de los servidores judiciales.

La presunta tardanza para proceder respecto a lo requerido no obedece a la desidia o falta de compromiso de la funcionaria judicial, quien se posesionó en el cargo desde el 28 de abril de 2023, y a partir de allí, le ha correspondido asumir el conocimiento de los asuntos bajo su tutela, establecer la dinámica de trabajo y recibir por redistribución todos los procesos que estaban a cargo del Juzgado 4° Civil Municipal de Montería (antes Juzgado 3° Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería).

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba es conocedor de la problemática de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, cuya alta demanda de justicia en esta ciudad, incide en el curso normal de los procesos bajo su conocimiento.

Es por ello que, el Consejo Superior de la Judicatura a petición de la Seccional, evaluó la oferta judicial, las cargas de trabajo de los despachos permanentes y la planta de cargos, y como resultado del análisis, evidenció la necesidad de adoptar medidas permanentes para el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia en la Rama Judicial, por lo que en consecuencia, dispuso a través del Artículo 45, literal d, del Acuerdo PCSJA22- 12028 de 19 de diciembre de 2022, crear, con carácter permanente, a partir del 11 de enero de 2023, dos (2) juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en Montería, conformados por los cargos de un juez, un secretario municipal, un sustanciador municipal y un asistente judicial grado 06, los cuales se denominan Juzgados 003 y 005 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, respectivamente.

Adicionalmente, en dicho acto administrativo el Consejo Superior de la Judicatura ordenó que a partir del 11 de enero de 2023 el Juzgado Tercero Transitorio de Pequeñas Causas y

Competencias Múltiples de Montería retomara su denominación original y competencia como Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, por lo que finalizó esa medida transitoria.

Conjuntamente, esta Seccional consideró necesario implementar un Plan de Mejoramiento en aras de evitar un colapso de los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple de Montería que cuentan con un número muy elevado de procesos en trámite, con sentencia y trámite posterior y un ingreso considerable de procesos de mínima cuantía, por lo que en consecuencia, a través de los Acuerdos Nos. CSJCOA21-2 de 07/01/2021, CSJCOA21-30 de 07/03/2021, CSJCOA21-45 de 24/06/2021, CSJCOA21-106 de 25/11/2021 y CSJCOA22-115 de 23/11/2022, fueron exonerados del reparto de acciones constitucionales de tutela y habeas corpus (en días y horas hábiles) los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, hasta el 30 de noviembre de 2023.

No obstante, a lo mencionado precedentemente, el Juzgado 3° Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería volvió a su denominación original como Juzgado 4° Civil Municipal de Montería, esta Judicatura dispuso en el Acuerdo CSJCOA23-1 del 11 de enero de 2023, dar apertura a este despacho del reparto de acciones constitucionales de tutela y habeas corpus (en días y horas hábiles), a partir del 11 de enero de 2023, y en el Acuerdo No. CSJCOA23-34 de 23 de marzo de 2023, se acordó redistribuir los procesos del Juzgado 4° Civil Municipal de Montería para ser enviados al Juzgado 3° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería (despacho vigilado).

Además de las medidas previamente anunciadas, el Consejo Seccional de la Judicatura ordenó en el Acuerdo No. CSJCOA23-46 de 2 de mayo de 2023, la exoneración del reparto de procesos ordinarios, a los Juzgados 1°, 2°, 3° y 4° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, durante cinco (05) meses, a partir del 03 de mayo de 2023 y hasta el 03 de octubre de 2023, sin que de manera alguna haya lugar a compensación al iniciar el reparto nuevamente para estos despachos. Empero, si antes de llegar a la fecha estipulada de la terminación de la medida de exoneración del reparto, esto es, el 03 de octubre de 2023, se verifica que se han equilibrado las cargas de procesos, se culminará de manera inmediata la medida transitoria. En ese mismo acuerdo, se decidió exonerar del reparto de acciones constitucionales de tutela y habeas corpus (en días y horas hábiles) a los Juzgados 3° y 5° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, a partir del 2 de mayo de 2023 y hasta el 30 de noviembre de 2023; sin que de manera alguna haya lugar a la compensación, al iniciar el reparto de las acciones constitucionales (tutelas y habeas corpus en días y horas hábiles) nuevamente para estos 2 despachos judiciales.

Finalmente, con el Acuerdo CSJCOA23-C5 del 20 de septiembre de 2023, esta Seccional terminó la exoneración del reparto de procesos ordinarios, para los Juzgado 1, 2° y 4° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, a partir del 4 de octubre de 2023 y prorrogar la exoneración del reparto de procesos ordinarios, estipulada en el Acuerdo N° CSJCOA23-46 del 02 de mayo de 2023 para el juzgado 3° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, en aras de equiparar las cargas de procesos, desde el 4 de octubre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024.

Es necesario señalar entonces, que la dilación presentada no es por negligencia o inoperatividad de la funcionaria judicial, ya que la congestión judicial pudo ocasionar la imposibilidad de cumplir de manera irrestricta con los términos fijados en la ley; por lo que,

también se dará aplicación al Acuerdo PSAA11-8716, en su Artículo 7, párrafo segundo que dispone:

“...Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.” (Subraya para resaltar).

Por tal razón, en consideración a lo anteriormente expuesto, se

3. RESUELVE

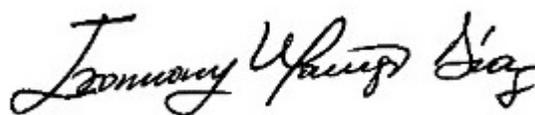
PRIMERO: Aceptar la medida correctiva implementada por la doctora Wendy Buelvas Hoyos, Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, dentro del trámite del proceso ejecutivo singular promovido por Coogrodescor contra Aleida Isabel Roca Castillo, radicado bajo el No 23-001-40-227-062-2014-00200-00.

SEGUNDO: Archivar la Vigilancia Judicial Administrativa No. 23-001-11-01-002-2023-00558-00, presentada presentada por la señora Aleida Isabel Roca Castillo.

SEGUNDO: Notificar por correo electrónico el contenido de la presente decisión a la doctora Wendy Buelvas Hoyos, Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Montería, y comunicar por ese mismo medio a la señora Aleida Isabel Roca Castillo, informándoles que contra esta decisión procede recurso de reposición en la vía gubernativa, el que se deberá interponer dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de notificación o comunicación, ante esta misma Corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Art. 74 y s.s.

TERCERO: La presente resolución rige a partir de su comunicación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ISAMARY MARRUGO DÍAZ

Presidente

IMD/LEPM/dtl